



Asamblea General

Distr. general
29 de febrero de 2012
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 61º período de sesiones (29 de agosto a 2 de septiembre de 2011)

Nº 43/2011 (Arabia Saudita)

Comunicación dirigida al Gobierno el 16 de febrero de 2011

Relativa a: Mohamed bin Abdullah bin Ali Al-Abdulkareem

El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo de Trabajo fue aclarado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102. El mandato fue prorrogado tres años por el Consejo mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, además, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pertinentes instrumentos internacionales aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad un carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin la posibilidad de entablar un recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento, el origen nacional, étnico o social, el idioma, la religión, la condición económica, la opinión política o de otra índole, el género, la orientación sexual, la discapacidad u otra condición, y tiene por objeto hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos o puede causar ese resultado (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

3. El Sr. Mohamed bin Abdullah bin Ali Al-Abdulkareem (en adelante, Sr. Al-Abdulkareem), de 39 años, es profesor de Derecho en la Universidad Mohamed ibn Saoud, en Riad. El Sr. Al-Abdulkareem también es miembro de una asociación de derechos civiles y políticos y de la Organización Árabe para las Libertades y la Buena Gobernanza, además de redactor jefe del *Journal of Congress of the Nation*.

4. Al parecer, el Sr. Al-Abdulkareem fue detenido en su casa el 5 de diciembre de 2010 por agentes de la dirección general de inteligencia. Según la información recibida, no se le mostró ninguna orden de detención ni se le informó de los hechos que se le imputaban.

5. El Sr. Al-Abdulkareem fue recluido en la prisión de Al Hayr, cerca de Riad. Por lo visto, el Sr. Al-Abdulkareem pudo hablar con su esposa dos veces por teléfono después de su detención y, por lo tanto, comunicarle su paradero.

6. Según la información recibida, el Sr. Al-Abdulkareem no fue puesto a disposición judicial y tampoco se le comunicaron las razones de su detención ni la duración de esta. La fuente sostiene que estas omisiones son contrarias a las normas internacionales de derechos humanos y el derecho interno de la Arabia Saudita, en particular, el artículo 36 de la Ley fundamental de gobernanza, el artículo 35 de la Ley de procedimiento penal (Real Decreto N° M/39) y el artículo 2 de la Ley de procedimiento penal.

7. También se indicó que, el 8 de diciembre de 2010, un grupo de abogados que defendía al Sr. Al-Abdulkareem presentó una petición en su nombre para pedir que se respetasen sus derechos fundamentales, consagrados en la legislación nacional, esto es, que se decretase la libertad condicional de conformidad con el Decreto ministerial N° 1900 y el artículo 120 de la Ley de procedimiento penal, que se permitiese al Sr. Al-Abdulkareem tener acceso a asistencia jurídica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de procedimiento penal y que el Sr. Al-Abdulkareem fuese puesto a disposición judicial de conformidad con el artículo 14 de la Ley de procedimiento penal. Al parecer, los abogados del Sr. Al-Abdulkareem no recibieron ninguna respuesta de las autoridades y tampoco se les permitió visitar al Sr. Al-Abdulkareem. El Sr. Al-Abdulkareem no pudo oponerse a la legalidad de su detención y reclusión.

8. La fuente sostiene que la privación de la libertad del Sr. Al-Abdulkareem es consecuencia directa de su ejercicio pacífico del derecho a la libertad de opinión y expresión, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Según la información recibida, la detención y el encarcelamiento del Sr. Al-Abdulkareem guardan relación con el hecho de que había publicado un artículo en su página de Facebook en el que abordaba el problema de la sucesión y los mecanismos de transferencia del poder en la Arabia Saudita. Se ha señalado que ese mismo artículo está disponible en numerosos sitios de Internet y que ha generado un debate en la sociedad civil de la Arabia Saudita acerca de la organización del poder en el Reino.

Respuesta del Gobierno

9. El Grupo de Trabajo transmitió estas alegaciones al Gobierno de la Arabia Saudita, solicitando que le proporcionase, en su respuesta, información detallada sobre la situación actual del Sr. Al-Abdulkareem y aclarase las disposiciones legales que justifican que siga detenido.

10. Lamentablemente, el Grupo de Trabajo no ha recibido ninguna respuesta del Gobierno dentro del plazo previsto. El Grupo de Trabajo hubiese agradecido la cooperación del Gobierno de la Arabia Saudita.

11. Según la información recibida, el Sr. Al-Abdulkareem fue puesto en libertad el 15 de febrero de 2011. Sin embargo, habida cuenta del cuadro persistente de detenciones y encarcelamientos, en particular de defensores y activistas de los derechos humanos, el Grupo de Trabajo ha decidido, de conformidad con el párrafo 17 a), emitir una opinión sobre la detención y la privación de libertad del Sr. Al-Abdulkareem.

Deliberaciones

12. Basándose en la información presentada, el Grupo de Trabajo toma nota de que el Sr. Al-Abdulkareem, detenido el 5 de diciembre de 2010, no fue informado en ningún momento de las razones de su detención ni se le imputó cargo alguno. Tampoco fue puesto a disposición judicial ni tuvo acceso a un abogado. Así pues, según la información recibida, no se alegó ningún fundamento jurídico para justificar la detención y la reclusión del Sr. Al-Abdulkareem. La única razón que explicaría esta decisión de las autoridades es su pertenencia a una asociación de derechos civiles y políticos y a la Organización Árabe para las Libertades y la Buena Gobernanza, además de su labor como redactor jefe del *Journal of Congress of the Nation*.

13. El Grupo de Trabajo señala a la atención del Gobierno del Reino de la Arabia Saudita los principios fundamentales enunciados en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, en particular sus artículos 1 y 2, que establecen que: "Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional" y que "[l]os Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades".

14. Además, el Grupo de Trabajo desea reiterar el principio enunciado en la resolución 12/16 del Consejo de Derechos Humanos, en la que si bien se señala que el derecho a la libertad de opinión y de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales, se insta a los Estados a que se abstengan de restringir ese derecho, en particular en relación con la discusión de políticas del gobierno y el debate político; la información sobre los derechos humanos, las actividades del gobierno y la corrupción en el gobierno; la participación en campañas electorales, manifestaciones pacíficas o actividades políticas, en pro de la paz y la democracia, en particular, y la expresión de opiniones o discrepancias, ideas religiosas o creencias, entre otros, por miembros de minorías o de grupos vulnerables.

15. El Grupo de Trabajo observa con preocupación la existencia de un cuadro persistente de detenciones y encarcelamiento de personas que ejercen sus derechos humanos fundamentales, en particular el derecho a la libertad de opinión, expresión y asociación (véanse, por ejemplo, las opiniones N° 22/2008, N° 36/2008, N° 37/2008,

Nº 2/2011, Nº 10/2011 y Nº 30/2011 del Grupo de Trabajo). En el caso que nos ocupa, es evidente que la privación de la libertad del Sr. Al-Abdulkareem guarda únicamente relación con sus opiniones y actividades en una organización de la sociedad civil saudita.

16. El Grupo de Trabajo reitera que la prohibición de la detención arbitraria está recogida en el derecho internacional consuetudinario. Se ha reconocido oficialmente como norma imperativa de derecho internacional o *jus cogens*¹, que este Grupo de Trabajo sigue en sus opiniones. Además resulta de utilidad al respecto el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el asunto *Ahmadou Sadio Diallo*². Otra fuente es la jurisprudencia reiterada de las decisiones que contienen las opiniones de este Grupo de Trabajo y los demás titulares de mandatos de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas en relación con una amplia gama de tratados de derechos humanos y del derecho internacional consuetudinario.

Decisión

17. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación continuada de libertad del Sr. Al-Abdulkareem es arbitraria por cuanto se inscribe en las categorías I, II y III aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo, carece de fundamento jurídico y vulnera los artículos 9, 10 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

18. Por consiguiente, y habida cuenta del perjuicio que se deriva de la detención y la reclusión ilícitas para el Al-Abdulkareem y su familia, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de la Arabia Saudita que proporcione una reparación adecuada.

19. El Grupo de Trabajo insta e invita al Gobierno de la Arabia Saudita a que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

[Aprobada el 2 de septiembre de 2011.]

¹ Véase Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 29 relativa al estado de excepción (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11), párr. 11, 31 de agosto de 2000.

² *La República de Guinea c. la República Democrática del Congo*, 30 de noviembre de 2010, en particular, los argumentos del magistrado Cançado Trindade sobre la arbitrariedad en el derecho internacional consuetudinario, que el Grupo de Trabajo suscribió (véase Corte Internacional de Justicia, *Ahmadou Sadio Diallo (la República de Guinea c. la República Democrática del Congo)*, fondo, fallo de 30 de noviembre de 2010, *ICJ Reports 2010*, párr. 79; voto particular del magistrado Cançado Trindade, págs. 26 a 37, párrs. 107 a 201).